

No. 34531

**SPAIN
and
BRAZIL**

**Treaty concerning the transfer of prisoners. Signed at
Brasília on 7 November 1996**

*Authentic texts: Spanish and Portuguese.
Registered by Spain on 27 April 1998.*

**ESPAGNE
et
BRÉSIL**

**Traité sur le transfèrement de prisonniers. Signé à Brasília le
7 novembre 1996**

*Textes authentiques : espagnol et portugais.
Enregistré par l'Espagne le 27 avril 1998.*

[SPANISH TEXT — TEXTE ESPAGNOL]

**TRATADO SOBRE TRASLADO DE PRESOS ENTRE EL REINO DE
ESPAÑA Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL**

El Reino de España,

y

la República Federativa del Brasil

(en adelante denominadas las "Partes"),

Deseosos de promover la rehabilitación social de los presos permitiendo que cumplan sus sentencias en el país del que son nacionales,

Convienen en lo siguiente:

ARTICULO I

1. Las penas privativas de libertad impuestas en el Reino de España a nacionales de la República Federativa del Brasil podrán cumplirse de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado.

2. Las penas privativas de libertad impuestas a nacionales españoles en la República Federativa del Brasil podrán cumplirse de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado.

ARTICULO II

A los efectos del presente Tratado,

- a) por "Estado remitente" se entenderá la Parte de la que se traslada el preso;
- b) por "Estado receptor" se entenderá la Parte a la que se traslada el preso;

- c) por "nacional" se entenderá, en el caso de España, un ciudadano español;
- d) por "nacional" se entenderá, en el caso de Brasil, un brasileño, según se le define en la Constitución brasileña;
- e) por "preso" se entenderá una persona condenada por un delito según sentencia dictada en el territorio de una de las Partes.

ARTICULO III

La aplicación del presente Tratado quedará sujeta a las siguientes condiciones:

- a) el delito por el que se haya impuesto la pena deberá constituir también delito en el Estado receptor;
- b) el preso deberá ser nacional del Estado receptor;
- c) en el momento de la presentación de la solicitud a que se refiere el párrafo tercero del Artículo V, deberán quedar por cumplir por los menos seis meses de pena;
- d) que la sentencia sea definitiva;
- e) que el preso consienta en el traslado.

ARTICULO IV

Serán autoridades centrales para la aplicación del presente Tratado:

- por el Reino de España, el Ministerio de Justicia;
- por la República Federativa del Brasil, el Ministerio de Justicia.

ARTICULO V

1. Cada Parte deberá explicar el contenido del presente Tratado a cualquier preso al que pueda aplicarse el mismo.
2. Cualquier traslado de presos en el ámbito del presente Tratado deberá efectuarse por iniciativa del Estado remitente. Nada de lo dispuesto en el presente Tratado deberá interpretarse como un impedimento para que un preso presente una solicitud de traslado al Estado remitente.
3. Si un preso solicita el traslado y el Estado remitente lo aprueba, el Estado remitente deberá transmitir la solicitud al Estado receptor por conducto diplomático.
4. Si el Estado receptor aprueba una solicitud, deberá notificar al Estado remitente su decisión y tomar las medidas necesarias para efectuar el traslado; en caso contrario, deberá informar sin demora al Estado remitente de su negativa por conducto diplomático.
5. Antes de tomar una decisión relativa a un traslado, cada Parte deberá examinar todos los factores que puedan contribuir a promover la rehabilitación del preso.
6. Si el Estado receptor aprueba el traslado, el Estado remitente deberá proporcionar al Estado receptor la oportunidad, si éste así lo desea, de comprobar, antes del traslado, el consentimiento expreso del preso en relación con el traslado. El consentimiento no podrá ser revocado después de la aceptación del traslado por el Estado receptor.
7. No deberá efectuarse el traslado de ningún preso a menos que su pena sea de duración ejecutiva en el Estado receptor o a menos que esa pena sea convalidada por las autoridades competentes del Estado receptor, para que tenga una duración ejecutiva en el mismo.
8. El Estado remitente deberá presentar una declaración al Estado receptor en la que se indique el delito por el cual fue condenado el preso, la duración de la pena y el tiempo ya cumplido, indicando, incluso, cualquier período de detención preventiva. La declaración deberá contener también una exposición detallada del

comportamiento del preso en prisión, a efectos de determinar si el mismo puede gozar de los beneficios previstos en la legislación del Estado receptor. El Estado remitente deberá presentar también al Estado receptor una copia autenticada de la sentencia dictada por la autoridad judicial competente, certificando su autenticidad, junto con cualesquiera modificaciones introducidas en la misma. También deberá proporcionar cualquier otra información que pueda ayudar al Estado receptor a determinar el trato más conveniente para el preso con el fin de promover su rehabilitación social. Los documentos anteriormente citados deberán estar redactados en la lengua del Estado receptor o traducidos a la misma.

9. El Estado receptor podrá solicitar informaciones complementarias si considera que los documentos proporcionados por el Estado remitente no le permiten cumplir lo dispuesto en el presente Tratado e informará al Estado remitente del procedimiento de ejecución que vaya a seguir.

10. Cada Parte deberá tomar las medidas legales pertinentes y, en caso necesario, establecer los procedimientos adecuados con el fin de que, a los efectos del presente Tratado, las sentencias pronunciadas por tribunales de la otra Parte surtan efectos jurídicos dentro de su territorio.

ARTICULO VI

1. El Estado remitente deberá trasladar al preso al Estado receptor en el lugar acordado entre las partes. El Estado receptor será responsable de la custodia y transporte del preso hasta la institución penitenciaria o lugar donde deba cumplir la pena; en caso necesario, el Estado receptor solicitará la cooperación de terceros países con el fin de permitir el tránsito de un preso a través de sus territorios. En casos excepcionales, mediante acuerdo entre ambas Partes, el Estado remitente deberá prestar asistencia en relación con las mencionadas solicitudes hechas por el Estado receptor.

2. En el momento de la entrega del preso, el Estado remitente proporcionará a los agentes policiales encargados de la misma un certificado auténtico, destinado a las autoridades del Estado receptor, en el que consten, actualizados a la fecha de entrega, el tiempo efectivo de detención del preso y el tiempo deducido en función

de los beneficios penitenciarios, si existieren, así como una fotocopia del expediente penal y penitenciario, que sirva de punto de partida para la prosecución del cumplimiento de la pena.

3. El Estado receptor será responsable de todos los gastos relacionados con un preso a partir del momento en que éste pase a su custodia.

4. En la ejecución de la pena de un preso que haya sido trasladado deberán observarse la legislación y los procedimientos del Estado receptor. El Estado remitente podrá conceder indulto, amnistía o commutación de pena de conformidad con su Constitución u otras disposiciones legales aplicables. No obstante, el Estado receptor podrá solicitar del Estado remitente la concesión del indulto o la commutación, mediante solicitud motivada que será examinada con benevolencia.

5. La pena impuesta por el Estado remitente no podrá ser aumentada o prolongada por el Estado receptor en ninguna circunstancia.

6. A solicitud de una de las Partes, la otra Parte deberá presentar un informe sobre la situación de cumplimiento de la pena de cualquier preso trasladado en el ámbito del presente Tratado, incluida, en particular, la libertad condicional o excarcelación.

7. Al preso trasladado de conformidad con las disposiciones de este Tratado no se le privará de ningún derecho en virtud de la legislación del Estado receptor, salvo en lo exigido por la propia imposición de la pena.

ARTICULO VII

Unicamente el Estado remitente tendrá competencia para juzgar cualquier recurso de revisión. Una vez recibida la oportuna notificación del Estado remitente, el Estado receptor deberá comprometerse a ejecutar cualesquiera modificaciones introducidas en la pena.

ARTICULO VIII

Un preso trasladado de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado no podrá ser detenido, juzgado o sentenciado en el Estado receptor por el mismo delito que hubiera dado lugar a la pena.

ARTICULO IX

1. El presente Tratado podrá hacerse extensivo a personas sujetas a vigilancia u otras medidas de conformidad con la legislación de una de las Partes en relación con los delincuentes juveniles. Las Partes deberán, de conformidad con sus legislaciones, convenir el tipo de tratamiento que deberá dispensarse a dichas personas en caso de traslado. El consentimiento para el traslado deberá recabarse de la persona legalmente autorizada.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo deberá interpretarse como una limitación de la capacidad que puedan tener las Partes, independientemente del presente Tratado, para otorgar o aceptar el traslado de delincuentes juveniles o de otros presos.

ARTICULO X

1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación. El canje de los instrumentos de ratificación deberá efectuarse en Madrid.

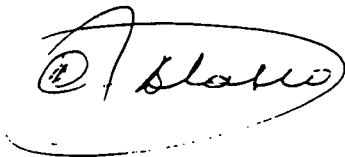
2. El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después del canje de los instrumentos de ratificación y permanecerá en vigor durante tres (3) años.

3. En caso de que ninguna de las Partes notifique a la otra su intención en contrario por lo menos noventa (90) días antes de la expiración del período arriba mencionado, el presente Tratado se considerará tácitamente prorrogado por períodos sucesivos de tres años.

4. En caso de denuncia del presente Tratado, sus disposiciones permanecerán en vigor, con respecto a los presos que hubiesen sido trasladados al amparo de las mismas, hasta el término de las penas respectivas.

Hecho en Brasilia a 7 del mes de Noviembre de 1996, en dos ejemplares originales, en español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Por el Reino
de España:



CARLOS BLASCO VILLA
Embajador de España en Brasil

Por la República Federativa
del Brasil:



LUIZ FELIPE PALMEIRA LAMPREIA
Ministro de Estado
de Relaciones Exteriores

[PORTUGUESE TEXT — TEXTE PORTUGAIS]

TRATADO SOBRE TRANSFERÊNCIA DE PRESOS ENTRE O REINO
DA ESPANHA E O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL

O Reino da Espanha

e

O Governo da República Federativa do Brasil
(doravante denominados as "Partes"),

Desejosos de promover a reabilitação social de presos permitindo
que cumpram suas sentenças no país de que são nacionais,

Acordam o seguinte:

ARTIGO 1

1. As penas de detenção impostas a nacionais espanhóis na
República Federativa do Brasil poderão ser cumpridas segundo o disposto no
presente Tratado.

2. As penas de detenção impostas no Reino da Espanha a nacionais
da República Federativa do Brasil poderão ser cumpridas segundo o disposto
no presente Tratado.

ARTIGO 2

Para fins do presente Tratado:

a) por "Estado remetente" se compreenderá a Parte da qual
se transfere o preso;

- b) por "Estado recebedor" se compreenderá a Parte para a qual se transfere o preso;
- c) por "nacional" se compreenderá, no caso do Brasil, um brasileiro, segundo definido pela Constituição brasileira;
- d) por "nacional" se compreenderá, no caso da Espanha, um cidadão espanhol;
- e) por "preso" se compreenderá uma pessoa condenada por delito segundo sentença proferida no território de uma das Partes.

ARTIGO 3

A aplicação do presente Tratado ficará sujeita às seguintes condições:

- a) o delito pelo qual a pena seja imposta deverá também constituir delito no Estado recebedor;
- b) o preso deverá ser nacional do Estado recebedor;
- c) no momento da apresentação da solicitação a que se refere o parágrafo terceiro do Artigo 5 deverão restar pelo menos 6 (seis) meses de pena a cumprir;
- d) que a sentença seja definitiva;
- e) que o preso consinta na transferência.

ARTIGO 4

Serão autoridades centrais para a aplicação deste Tratado:

- a) pelo Governo da República Federativa do Brasil, o Ministério da Justiça;

b) pelo Reino da Espanha, o Ministério da Justiça.

ARTIGO 5

1. Cada Parte deverá explicar o teor do presente Tratado a qualquer preso a que o mesmo possa aplicar-se.
2. Qualquer transferência de presos no âmbito do presente Tratado deverá efetuar-se por iniciativa do Estado remetente. Nenhuma disposição do presente Tratado deverá ser interpretada como impedimento para que um preso apresente pedido de transferência ao Estado remetente.
3. Se um preso solicitar transferência e o Estado remetente aprovará-la, o Estado remetente deverá transmitir a petição ao Estado recebedor, por via diplomática.
4. Se o Estado recebedor aprovar o pedido, deverá notificar o Estado remetente de sua decisão e tomar as medidas necessárias para efetuar a transferência; caso contrário, deverá informar, sem demora, o Estado remetente de sua recusa, por via diplomática.
5. Antes de tomar uma decisão relativa a uma transferência, cada Parte deverá examinar todos os fatores que possam contribuir para promover a reabilitação do preso.
6. Se o Estado recebedor aprovar a transferência, o Estado remetente deverá dar ao Estado recebedor a oportunidade, se este último assim o desejar, de comprovar, antes da transferência, o consentimento expresso do preso em relação à transferência. O consentimento não poderá ser revogado depois da aceitação da transferência pelo Estado recebedor.
7. Não deverá ser efetuada a transferência de qualquer preso a menos que sua pena seja de duração exequível no Estado recebedor, ou a menos que essa pena seja convertida, pelas autoridades competentes do Estado recebedor, a uma duração exequível nesse Estado.
8. O Estado remetente deverá apresentar uma declaração ao Estado recebedor na qual se indique o delito pelo qual foi condenado o preso, a duração da pena e o tempo já cumprido, assinalando, inclusive, todo o

período de detenção prévia. A declaração deverá conter ainda uma exposição detalhada do comportamento do preso em detenção, para fins de determinar se o mesmo pode gozar dos benefícios previstos na legislação do Estado recebedor. O Estado remetente deverá apresentar também ao Estado recebedor uma cópia autenticada da sentença proferida pela Autoridade Judicial competente certificando que é autêntica, junto com quaisquer modificações introduzidas na mesma. Também deverá fornecer qualquer outra informação que possa ajudar o Estado recebedor a determinar o tratamento mais conveniente ao preso com o intuito de promover sua reabilitação social. Os documentos anteriormente citados deverão se redigidos ou traduzidos no idioma do Estado recebedor.

9. O Estado recebedor poderá solicitar informações complementares se considerar que os documentos fornecidos pelo Estado remetente não lhe permitem cumprir o disposto no presente Tratado e informará o Estado remetente do procedimento da execução que seguirá.

10. Cada Parte deverá tomar as medidas legais pertinentes e, caso necessário, estabelecer os procedimentos adequados com o fim de que, para os objetivos do presente Tratado, as sentenças pronunciadas pelos tribunais da outra Parte produzam efeitos jurídicos dentro de seu território.

ARTIGO 6

1. O Estado remetente deverá transferir o preso para o Estado recebedor em local acordado entre as Partes. O Estado recebedor será responsável pela custódia e transporte do preso até a penitenciária ou o local onde deva cumprir a pena; quando necessário, o Estado recebedor solicitará a cooperação de terceiros países com o intuito de permitir o trânsito de um preso através de seus territórios. Em casos excepcionais, mediante acordo entre ambas as Partes, o Estado remetente deverá prestar assistência em relação às mencionadas solicitações feitas pelo Estado recebedor.

2. No momento da entrega do preso, o Estado remetente fornecerá aos agentes policiais encarregados da mesma um certificado autêntico, destinado às autoridades do Estado recebedor, em que constem, atualizados à data da entrega, o tempo efetivo de detenção do preso e o tempo deduzido em função dos benefícios penitenciários, se existirem, assim como uma fotocópia

do expediente penal e penitenciário, que sirva de ponto de partida para o prosseguimento do cumprimento da pena.

3. O Estado recebedor será responsável por todas as despesas relacionadas com um preso a partir do momento em que este passe à sua custódia.

4. Na execução da pena de um preso que tenha sido transferido, deverá observar-se a legislação e os procedimentos do Estado recebedor. O Estado remetente poderá conceder indulto, anistia ou comutação da pena conforme sua Constituição ou outras disposições legais aplicáveis. Não obstante, o Estado recebedor poderá solicitar do Estado remetente a concessão do indulto ou comutação, mediante petição fundamentada a qual será examinada com benevolência.

5. A pena imposta pelo Estado remetente não poderá ser aumentada ou prolongada pelo Estado recebedor sob nenhuma circunstância.

6. Por solicitação de uma das Partes, a outra Parte deverá apresentar um relato sobre a situação do cumprimento da pena de qualquer preso transferido no âmbito do presente Tratado, incluída, em particular, a liberdade condicional ou soltura.

7. O preso transferido de acordo com as disposições deste Tratado não será privado de nenhum direito em virtude da legislação do Estado recebedor, salvo quando suscitado pela própria imposição da pena.

ARTIGO 7

Somente o Estado remetente terá competência para julgar um recurso de revisão. Uma vez recebida a oportuna notificação do Estado remetente, o Estado recebedor deverá comprometer-se a executar quaisquer modificações introduzidas na pena.

ARTIGO 8

Um preso transferido de conformidade com o disposto no presente Tratado não poderá ser detido, julgado ou sentenciado no Estado recebedor pelo mesmo delito que houver dado origem à pena.

ARTIGO 9

1. O presente Tratado poderá estender-se a pessoas sujeitas à vigilância ou outras medidas, de acordo com a legislação de uma das Partes com relação aos menores infratores. As Partes deverão, de conformidade com suas legislações, acordar o tipo de tratamento que deverá ser dispensado a tais pessoas no caso de transferência. O consentimento para a transferência deverá ser obtido junto à pessoa legalmente autorizada.

2. Nenhuma disposição do presente Artigo deverá ser interpretada como fator limitante da capacidade que possam ter as Partes, independentemente do presente Tratado, de outorgar ou aceitar a transferência de menores infratores ou de outros presos.

ARTIGO 10

1. O presente Tratado estará sujeito a ratificação. A troca dos instrumentos de ratificação deverá efetuar-se em Madri.

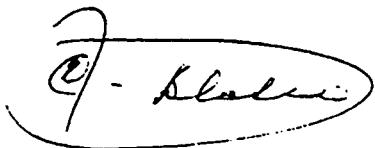
2. O presente Tratado entrará em vigor 30 (trinta) dias após a troca dos instrumentos de ratificação e permanecerá em vigor durante 3 (três) anos.

3. Caso nenhuma das Partes notifique à outra sua intenção em contrário com, pelo menos 90 (noventa) dias de antecedência em relação ao término do período acima mencionado, o presente Tratado será considerado tacitamente prorrogado por períodos sucessivos de 3 (três) anos.

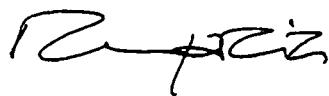
4. Em caso de denúncia do presente Tratado, suas disposições permanecerão em vigor em relação aos presos que, ao amparo das mesmas, houverem sido transferidos, até o término das respectivas penas.

Feito em Brasília , em 7 de novembro de 1996, em dois exemplares originais, nos idiomas espanhol e português, sendo ambos os textos igualmente autênticos.

Pelo Reino
da Espanha:



Pelo Governo
da República Federativa do Brasil:



[TRANSLATION — TRADUCTION]

TREATY¹ CONCERNING THE TRANSFER OF PRISONERS BETWEEN THE KINGDOM OF SPAIN AND THE FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL

The Kingdom of Spain and the Federative Republic of Brazil (hereinafter referred to as "the Parties"),

Desiring to promote the social rehabilitation of prisoners by allowing them to serve their sentences in the countries of which they are nationals;

Have agreed as follows:

Article 1

1. Prison sentences imposed in the Kingdom of Spain on nationals of the Federative Republic of Brazil may be served in accordance with the provisions of this Treaty.

2. Prison sentences imposed in the Federative Republic of Brazil on Spanish nationals may be served in accordance with the provisions of this Treaty.

Article 2

For the purposes of this Treaty,

(a) "Sending State" shall mean the Party from which the prisoner is to be transferred;

(b) "Receiving State" shall mean the Party to which the prisoner is to be transferred;

(c) "National" shall mean, in the case of Spain, a Spanish citizen;

(d) "National" shall mean, in the case of Brazil, a Brazilian as defined by the Brazilian Constitution;

(e) "Prisoner" shall mean a person convicted of an offence by a judgement handed down in the territory of either Party.

Article 3

This Treaty shall apply on condition that:

(a) The offence for which the sentence was imposed also constitutes an offence in the receiving State;

(b) The prisoner is a national of the receiving State;

(c) At least six months of the sentence remain to be served at the time of submission of the request referred to in the third paragraph of article 5;

(d) The judgement is final;

(e) The prisoner consents to the transfer.

¹ Came into force on 22 April 1998 by the exchange of the instruments of ratification, which took place at Madrid, in accordance with article X.

Article 4

The central authorities for purposes of the implementation of this Treaty shall be:

- In the case of the Kingdom of Spain, the Ministry of Justice;
- In the case of the Federative Republic of Brazil, the Ministry of Justice.

Article 5

1. Each Party shall explain the terms of this Treaty to any prisoner to whom it might apply.

2. The transfer of prisoners within the terms of this Treaty shall be carried out at the initiative of the sending State. Nothing in this Treaty shall be construed as preventing a prisoner from submitting a request for a transfer to the sending State.

3. If a prisoner requests a transfer and the sending State approves the request, it shall transmit the request to the receiving State through the diplomatic channel.

4. If the receiving State approves the request, it shall notify the sending State of its decision and shall take the necessary measures to carry out the transfer; if it denies the request, it shall so inform the sending State, without delay, through the diplomatic channel.

5. Before taking a decision on the transfer, each Party shall examine all the factors which might contribute to the prisoner's rehabilitation.

6. If the receiving State approves the transfer, the sending State shall give it an opportunity, if it so desires, to verify, prior to the transfer, that the prisoner has expressly consented to the transfer. Once the receiving State has accepted the transfer, consent may not be revoked.

7. No prisoner shall be transferred unless the length of their sentence is enforceable in the receiving State or unless the sentence is recognized by the competent authorities in the receiving State so that the length may be enforceable in that State.

8. The sending State shall provide the receiving State with a statement indicating the offence which gave rise to the conviction, the length of the sentence and the time already served, including any pre-trial detention. The statement shall also contain a detailed account of the prisoner's behaviour while in prison in order to determine whether the prisoner is eligible for any of the benefits provided for under the laws of the receiving State. The sending State shall also provide the receiving State with a certified copy of the judgement handed down by the competent judicial authority, certifying its authenticity, along with any amendments thereto. It shall also provide any other information which might help the receiving State determine the most appropriate treatment for purposes of furthering the prisoner's social rehabilitation. The above-mentioned documents shall be drawn up in the language of the receiving State or translated into that language.

9. The receiving State may request additional information if it deems that the documents furnished by the sending State do not allow it to comply with the provisions of this Treaty; it shall inform the sending State of the procedure it intends to follow.

10. Each Party shall take the relevant legal measures and, if necessary, establish adequate procedures, for the purposes of this Treaty, to give legal effect within its territory to the sentence handed down by the courts of the other Party.

Article 6

1. The sending State shall transfer the prisoner to the receiving State at the place agreed between the Parties. The receiving State shall be responsible for guarding and transporting the prisoner to the penitentiary institution or place where the sentence is to be served; if necessary, the receiving State shall request the cooperation of third countries in order to allow the prisoner to transit their territories. In exceptional cases, by mutual agreement, the sending State shall assist with the above-mentioned requests made by the receiving State.

2. At the time the prisoner is handed over, the sending State shall provide the police officers responsible for that task with a certified document, addressed to the authorities of the receiving State, indicating, as of the date of the handing over, the actual time the prisoner has spent in detention and the time deducted by way of prison benefits, if any, together with a photocopy of the trial and prison records, to serve as a point of departure for pursuing the execution of the sentence.

3. The receiving State shall be responsible for all costs related to the prisoner from the moment the latter passes into its custody.

4. The laws and procedures of the receiving State shall be observed in the enforcement of the sentence of a prisoner who has been transferred. The sending State may grant a pardon, an amnesty or may commute the sentence in accordance with its Constitution or other applicable legal provisions. The receiving State may, nevertheless, ask the sending State to grant a pardon or to commute the sentence, stating its reasons for making such a request; the request shall be given favourable consideration.

5. Under no circumstances may the receiving State increase or extend the sentence imposed by the sending State.

6. At the request of one of the Parties, the other Party shall present a report giving the status of execution of the sentence of any prisoner transferred under the terms of this Treaty, and stating, in particular, whether the prisoner has been paroled or released.

7. A prisoner transferred in accordance with the provisions of this Treaty shall not be deprived of any right under the legislation of the receiving State, except as required by the prison sentence itself.

Article 7

Only the sending State shall have competence to rule on an application for reconsideration of the facts. Once it has received the relevant notification from the sending State, the receiving State shall undertake to execute any modification of the sentence.

Article 8

A prisoner transferred in accordance with the provisions of this Treaty may not again be detained, tried or sentenced in the receiving State for the same offence for which the sentence was imposed.

Article 9

1. This Treaty may be extended to persons subject to supervision or other measures under the legislation of one of the Parties regarding juvenile offenders. The Parties shall, in accordance with their respective legislation, agree on the type of treatment to be afforded to such persons in the event of a transfer. Consent to the transfer shall be obtained from the legally authorized person.

2. Nothing in this article shall be construed as limiting the capacity of the Parties, independently of this Treaty, to authorize or accept the transfer of juvenile offenders or other prisoners.

Article 10

1. This Treaty shall be subject to ratification. The instruments of ratification shall be exchanged in Madrid.

2. This Treaty shall enter into force thirty [30] days after the exchange of the instruments of ratification and shall remain in force for three [3] years.

3. If neither Party notifies the other, at least ninety [90] days before the expiration of the above-mentioned period, of its intention to the contrary, this Treaty shall be considered as having been automatically extended for successive three-year periods.

4. If this Treaty is denounced, its provisions shall continue to apply, with respect to any prisoners transferred under its provisions, until the completion of their respective sentences.

DONE at Brasília on 7 November 1996, in two copies in the Spanish and Portuguese languages, both texts being equally authentic.

For the Kingdom
of Spain:

CARLOS BLASCO VILLA
Ambassador of Spain
in Brazil

For the Federative Republic
of Brazil:

LUIZ FELIPE PALMEIRA LAMPREIA
Minister of State
in the Ministry of Foreign Affairs

[TRADUCTION — TRANSLATION]¹

**TRAITÉ² SUR LE TRANSFÈREMENT DE PRISONNIERS ENTRE LE
ROYAUME D'ESPAGNE ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE
DU BRÉSIL**

Le Royaume d'Espagne et la République Fédérative du Brésil (dénommée ci-après les « Parties »),

Désirant favoriser la réinsertion sociale des prisonniers en permettant qu'ils exécutent leur jugement dans le pays dont ils sont ressortissants,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I

1. Les peines privatives de liberté imposées dans le Royaume d'Espagne à des ressortissants de la République Fédérative du Brésil pourront être exécutées conformément aux dispositions du présent Traité.

2. Les peines privatives de liberté imposées à des ressortissants espagnols en République Fédérative du Brésil pourront être exécutées conformément aux dispositions du présent Traité.

Article II

Aux effets du présent Traité,

- a) « Etat expéditeur » désigne la Partie d'où le prisonnier est transféré;
- b) « Etat récepteur » désigne la Partie à laquelle le prisonnier est transféré;
- c) « National » désigne, dans le cas de l'Espagne, un citoyen espagnol;
- d) « National » désigne, dans le cas du Brésil, un Brésilien, conformément à ce qui est défini dans la Constitution brésilienne;
- e) « Prisonnier » désigne une personne condamnée pour un délit conformément à un jugement rendu sur le territoire de l'une des Parties.

Article III

L'application du présent Traité est assujettie aux conditions suivantes :

- a) Le délit pour lequel la peine a été imposée devra aussi constituer un délit dans l'autre Etat récepteur;
- b) Le prisonnier devra être national de l'Etat récepteur;
- c) Au moment de la présentation de la demande à laquelle se réfère le paragraphe 3 de l'article V, il devra rester au moins six mois de peine à subir;
- d) Que le jugement soit définitif;
- e) Que le prisonnier consente au transfèrement.

¹ Traduction fournie par le Gouvernement espagnol — Translation supplied by the Government of Spain.

² Entré en vigueur le 22 avril 1998 par l'échange des instruments de ratification, qui a eu lieu à Madrid, conformément à l'article X.

Article IV

Les autorités centrales pour l'application du présent Traité sont les suivantes :

- Pour le Royaume d'Espagne, le Ministère de la Justice;
- Pour la République Fédérative du Brésil, le Ministère de la Justice.

Article V

1. Chaque Partie devra expliquer le contenu du présent Traité à tout prisonnier auquel il peut être appliqué.

2. Tout transfèrement de prisonnier dans le cadre du présent Traité devra s'effectuer sur initiative de l'Etat expéditeur. Aucune des dispositions du présent Traité ne devra être interprétée comme un empêchement pour qu'un prisonnier présente une demande de transfèrement à l'Etat expéditeur.

3. Si un prisonnier demande le transfèrement et l'Etat expéditeur l'approuve, l'Etat expéditeur devra transmettre la demande à l'Etat récepteur par la voie diplomatique.

4. Si l'Etat récepteur approuve une demande, il devra notifier sa décision à l'Etat expéditeur et prendre les mesures nécessaires pour effectuer le transfèrement; dans le cas contraire, il devra informer l'Etat expéditeur de son refus dans les meilleurs délais, par la voie diplomatique.

5. Avant de prendre une décision relative à un transfèrement, chaque Partie devra examiner tous les facteurs pouvant contribuer à la réinsertion du prisonnier.

6. Si l'Etat récepteur approuve le transfèrement, l'Etat expéditeur devra donner la possibilité à l'Etat récepteur, si celui-ci le désire, de vérifier, avant le transfèrement le consentement expresse du prisonnier concernant le transfèrement. Le consentement ne pourra pas être révoqué après l'acceptation du transfèrement par l'Etat récepteur.

7. On ne devra effectuer le transfèrement d'aucun prisonnier à moins que sa peine soit de durée exécutive dans l'Etat récepteur ou à moins que cette peine soit ratifiée par les autorités compétentes de l'Etat récepteur, pour qu'elle ait une durée exécutive dans celui-ci.

8. L'Etat expéditeur devra présenter une déclaration à l'Etat récepteur dans laquelle il sera indiqué le délit pour lequel le prisonnier a été condamné, la durée de la peine et le temps déjà subi, en précisant même toute période de détention préventive. La déclaration devra également contenir un exposé détaillé sur le comportement du prisonnier en prison, afin de déterminer si celui-ci peut jouir des bénéfices prévus par la législation de l'Etat récepteur. L'Etat expéditeur devra également présenter à l'Etat récepteur une copie certifiée conforme du jugement rendu par l'autorité judiciaire compétente, avec toutes les modifications introduites dans celui-ci. Il devra également fournir toute information pouvant aider l'Etat récepteur à déterminer le traitement le plus adéquat pour le prisonnier afin de faciliter sa réinsertion sociale. Les documents précités devront être rédigés dans la langue de l'Etat récepteur ou traduits dans celui-ci.

9. L'Etat récepteur pourra demander des informations complémentaires s'il considère que les documents fournis par l'Etat expéditeur ne lui permettent pas de respecter les dispositions du présent Traité et informera l'Etat expéditeur de la procédure d'exécution qu'il va suivre.

10. Chaque Partie devra prendre les mesures légales pertinentes et, en cas de nécessité, établir les procédures adéquates afin que, aux effets du présent Traité, les jugements rendus par des tribunaux de l'autre Partie aient des effets juridiques sur son territoire.

Article VI

1. L'Etat expéditeur devra transférer le prisonnier à l'Etat récepteur à l'endroit convenu entre les Parties. L'Etat récepteur sera responsable de la garde et du transport du prisonnier jusqu'à l'institution pénitentiaire ou jusqu'à l'endroit où il doit subir la peine; en cas de nécessité, l'Etat récepteur demandera la coopération de pays tiers, afin de permettre le transit d'un prisonnier sur leurs territoires. Dans des cas exceptionnels, moyennant accord entre les deux Parties, l'Etat expéditeur devra apporter son assistance concernant lesdites demandes faites par l'Etat récepteur.

2. Au moment de la remise du prisonnier, l'Etat expéditeur fournira aux agents de police chargés de celui-ci un certificat certifié conformément, destiné aux autorités de l'Etat récepteur, où apparaîtront, actualisés à la date de la remise, le temps effectif de détention du prisonnier et le temps déduit en fonction des bénéfices plénitentiaires, le cas échéant, ainsi qu'une photocopie du dossier pénal et pénitentiaire, qui serve de point de départ pour la poursuite d'exécution de la peine.

3. L'Etat récepteur sera responsable de tous les frais relatifs à un prisonnier à partir du moment où celui-ci est placé sous sa garde.

4. Lors de l'exécution de la peine d'un prisonnier qui aurait été transféré, il faudra observer la législation et les procédures de l'Etat récepteur. L'Etat expéditeur pourra octroyer la grâce, l'amnistie ou la commutation de peine conformément à sa Constitution ou à d'autres dispositions légales applicables. Nonobstant, l'Etat récepteur pourra demander que l'Etat expéditeur octroie la grâce ou la commutation, moyennant demande motivée qui sera examinée avec bienveillance.

5. La peine imposée par l'Etat expéditeur ne pourra en aucun cas être augmentée ou prolongée par l'Etat récepteur.

6. A la demande de l'une des Parties, l'autre Partie devra présenter un rapport sur la situation d'exécution de la peine de tout prisonnier transféré dans le cadre du présent Traité, y compris, en particulier, la liberté constitutionnelle ou la relaxe.

7. On ne privera le prisonnier transféré conformément aux dispositions de ce Traité d'aucun droit en vertu de la législation de l'Etat récepteur, sauf ce qui est exigé par l'imposition de la peine elle-même.

Article VII

Seul l'Etat expéditeur aura compétence pour juger un recours en révision quelconque. Une fois la notification pertinente reçue de l'Etat expéditeur, l'Etat récepteur devra s'engager à exécuter toute modification introduite dans la peine.

Article VIII

Un prisonnier transféré conformément aux dispositions du présent Traité ne pourra pas être détenu, jugé ou condamné dans l'Etat récepteur pour le même délit que celui qui aurait donné lieu à la peine.

Article IX

1. Le présent Traité pourra être appliqué aux personnes placées sous surveillance ou d'autres mesures conformément à la législation de l'une des Parties concernant les délinquants juvéniles. Les Parties devront, conformément à leur législation, convenir du type de traitement qui devra être donné à ces personnes en cas de transfèrement. Le consentement pour le transfèrement devra être obtenu de la personne légalement autorisée.

2. Rien de ce qui figure dans le présent article ne devra être interprété comme une limitation de la capacité que pourraient avoir les Parties, indépendamment du présent Traité, pour octroyer ou accepter le transfèrement de délinquants juvéniles ou d'autres personnes.

Article X

1. Le présent Traité devra être ratifié. L'échange des instruments de ratification devra s'effectuer à Madrid.

2. Le présent Traité entrera en vigueur trente (30) jours après l'échange des instruments de ratification et sera en vigueur pendant trois (3) ans.

3. Au cas où aucune des Parties ne notifierait à l'autre son intention contraire au moins quatre-vingt-dix (90) jours avant l'expiration de la période ci-dessus indiquée, le présent Traité sera prorogé tacitement pour des périodes successives de trois ans.

4. En cas de dénonciation du présent Traité, ses dispositions resteront en vigueur, concernant les prisonniers qui auraient été transférés conformément à celles-ci, jusqu'à la fin des peines respectives.

FAIT à Brasilia, le 7 novembre 1996, en deux exemplaires originaux, en espagnol et portugais, les deux textes faisant également foi.

Pour le Royaume
d'Espagne :

CARLOS BLASCO VILLA

Pour la République fédérative
du Brésil :

LUIZ FELIPE PALMEIRA LAMPREIA

